

AMÉRICA LATINA BOLETÍN

MUJERES EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE



JUNIO 2023



CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

03



1.

SEGURIDAD ALIMENTARIA



2.

MEDIOS DE VIDA



3.

MIGRACIÓN



4.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



5.

VIOLENCIA DE GÉNERO

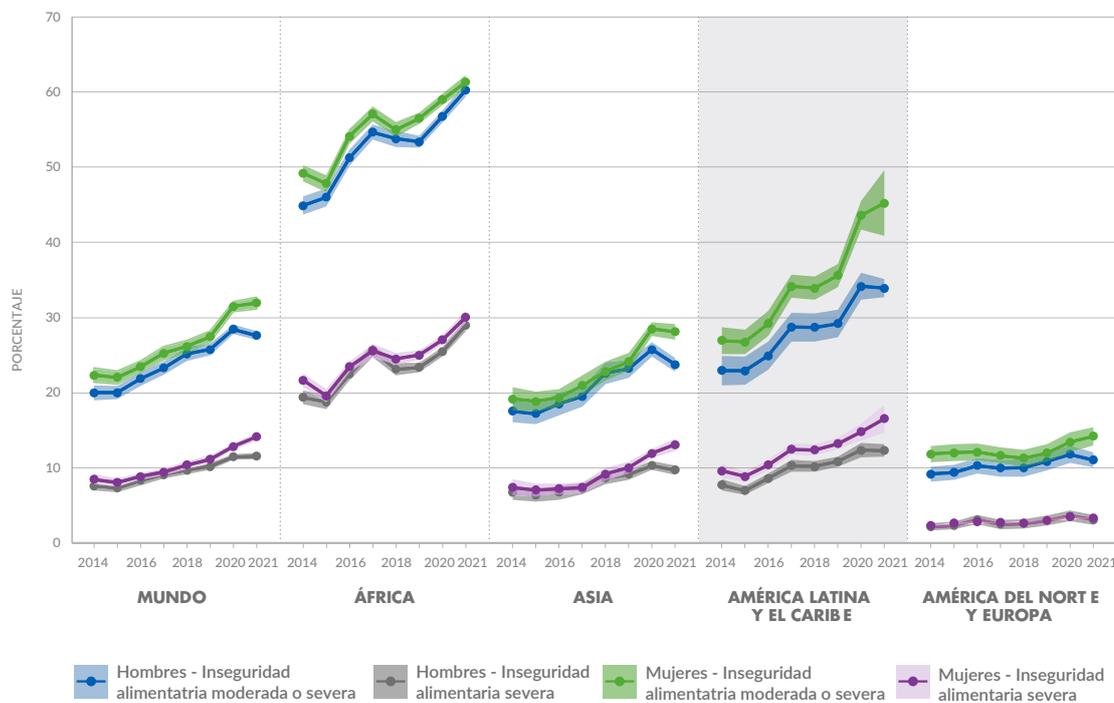
ALCANCE REGIONAL

38

ALIADOS ESTRATÉGICOS

39

En ninguna otra región la diferencia entre hombres y mujeres que padecen inseguridad alimentaria es tan alta como en América Latina y el Caribe. A nivel global la brecha es más de 4 puntos porcentuales (el 31,9% de las mujeres vs el 27,6% de los hombres), pero en América Latina esta brecha es de 11,3 puntos porcentuales, la más pronunciada del mundo.¹



Las mujeres tienden a verse afectadas de forma desproporcionada por las crisis.

FUENTE: FAO 2021

Las mujeres tienden a verse afectadas de forma desproporcionada por las crisis sanitarias y económicas en varios aspectos, como la seguridad alimentaria y la nutrición, la salud, y las dimensiones productivas y económicas, y en América Latina el contexto detrás de esta importante brecha de género es una crisis profunda y multidimensional que no parece tener una solución en el corto plazo. De hecho, la prevalencia de la **inseguridad alimentaria severa** casi se ha duplicado desde que los datos del FIES² se recogieron por primera vez en 2014¹, la prevalencia de la pobreza parece haberse estancado en niveles de la década pasada y la pobreza extrema es superior a la de hace 20 años³. Las mujeres son más pobres que los hombres, y el *índice de feminidad de la pobreza* no ha mejorado en 2021, al contrario; de igual modo, no ha habido avances significativos en la reducción de la desigualdad (CEPAL).

La situación de desigualdad de ingresos es marcada en la región⁴: un 27.6% de las mujeres no cuenta con ingresos propios contra el 11.2% de los hombres. En Guatemala este

porcentaje sube hasta el 51% (contra el 14% de los hombres) y supera el 30% en países como Honduras, Colombia o Venezuela. De hecho, durante la *pandemia*, se registró una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral, lo que significó un retroceso de casi dos décadas, y en el 2022 la participación de las mujeres en el mercado laboral era del 51% contra el 75% de los hombres (CEPAL). En la misma línea, las desigualdades en el sistema de salud afectan más a las mujeres, y la *pandemia* ha supuesto un importante retroceso en la cobertura de los programas de salud sexual y reproductiva (SSR).

Todos estos datos nos ayudan a entender la situación de exclusión y desigualdad que viven las mujeres. Sin embargo, son los registros sobre la violencia de género los que nos muestran en toda su magnitud la situación de vulnerabilidad al que están expuestas las mujeres en la región y la urgencia de actuar.

¹ State of Food Security and Nutrition in the World 2022 (SOFI)

² Escala de experiencia de inseguridad alimentaria

³ Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 (CEPAL)

⁴ CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe

En los países en donde existe algún tipo de medición sobre la violencia basada en género se observa que ha habido un aumento en los últimos años.



Manifestación contra la violencia de género en Colombia.

Por otra parte, la violencia sexual basada en género continúa invisibilizándose y sigue presentando bajos índices de reporte y denuncia. Por tanto, la información oficial debería entenderse apenas como una muestra incompleta de la problemática.

En **Colombia**, por ejemplo, en el año 2021, se registraron 39.774 casos de violencia contra la mujer, y en 2022 esta cifra subió a 47.487. Según el Informe de Derechos Humanos, en el año 2022 se presentaron 5.501 casos de violencias contra personas LGBTIQ+, de las cuales, 145 fueron víctimas de asesinato. De los exámenes medicolegales por presunto delito sexual, lo más alarmante es que el 60% fueron realizados a **niñas menores de 15 años**. Según el Panorama de Necesidades Humanitarias de Colombia, en los años 2021 y 2022, las comunidades indígenas y las niñas "representaron hasta el 70 por ciento de las sobrevivientes de casos reportados de Violencia Sexual". Según el Observatorio Colombiano de Femicidios, en el año 2022 se presentaron 619 casos, de los cuales el 7,59% correspondieron a personas venezolanas y 145 casos a personas LBGTIQ+. Entre enero y marzo 2023, se han registrado 133 casos de feminicidios, de los cuales el 10% corresponden a personas venezolanas y el 3% a personas LGBTIQ+.

En **Perú**, la situación también es alarmante. Según los Centros de Emergencia Mujer, se han atendido 52.409 casos de víctimas de violencia de género en los primeros cuatro meses de 2023. En este mismo país, cerca del 70% de los casos de violencia registrados en 2023 han sido contra **niñas y adolescentes**. En 2022 se reportaron casi 6.000 mujeres desaparecidas; se presume que en muchos casos estos hechos están vinculados a violencias basadas en género, tentativas de feminicidios y violencia sexual. La mayor cantidad de desapariciones (más del 60%), se da entre **niñas y adolescentes entre los 12 y 17 años de edad**. Así mismo, en 2022 se reportaron 27.362 casos de violencia sexual, y en lo que va de 2023 hay registrados 6.491 casos, de los cuales el 94,6% de las víctimas fueron mujeres. Con respecto a los feminicidios en Perú, en 2022 se registraron 130 casos, mientras que para el primer trimestre de 2023 ya habían sido reportados 59 casos.

En **Guatemala**, durante 2022, 541 mujeres perdieron la vida de forma violenta según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público. Las muertes violentas de mujeres aumentaron entre un 3 y 5% en 2022 con relación al 2021. Por otra parte, en **Nicaragua** (donde no se cuenta con datos oficiales) la organización

Católicas por el Derecho a Decidir indica que en el país hubo 57 mujeres víctimas de feminicidio en 2022. El organismo también reportó el asesinato de 11 mujeres nicaragüenses fuera de Nicaragua (Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala y Panamá) por razones de género. En los primeros 2 meses del 2023 ya se han reportado 16 feminicidios, 8 de los cuales se registraron en el país y la otra mitad en el extranjero.

En **Honduras**, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma (UNAH), registró entre 2022 y marzo de 2023, 384 casos de mujeres asesinadas por razones de género. Durante el año 2022, el Sistema Nacional de Emergencia registró 38.331 denuncias de violencia doméstica y 59.147 denuncias de maltrato familiar.

En **Venezuela**, la ONG Utopix reporta que los feminicidios han sido 219 en 2021, 240 en 2022 y 63 entre enero y abril de 2023. Así mismo, se observa que durante el año 2020 los feminicidios se incrementaron de forma alarmante: 1 feminicidio cada 34 horas, en comparación con el año 2016, 1 feminicidio cada 72 horas. En lo que va de 2023, se ha verificado una frecuencia de un feminicidio cada 45 horas y un feminicidio en grado de tentativa cada 43 horas.



Hay que visibilizar las necesidades y la urgencia de actuar, al tiempo que se promueven cambios duraderos

Si usáramos esta misma forma de visualizar los feminicidios para los otros países mencionados, podríamos mirar el reloj y empezar a contar: cada 15 horas una mujer será asesinada en Guatemala o Colombia, cada 20 horas será asesinada una mujer en Honduras y cada tres días en Perú.

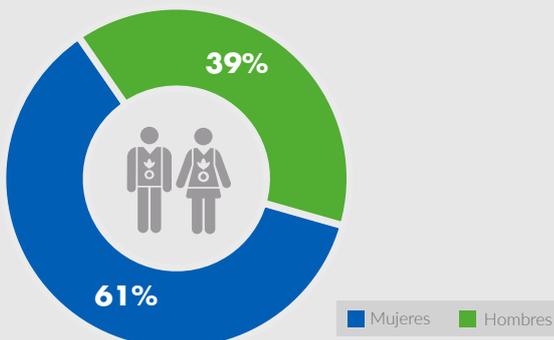
Hemos realizado estos cálculos basándonos en los registros del 2022, pero sabemos que en 2023 han aumentado la violencia y las necesidades. Por ejemplo, en el Panorama de Necesidades Humanitarias de Colombia se indica que los riesgos de Violencia Basada en Género continuarían, y se acrecentarían en 2023 en los contextos de emergencias humanitarias por conflicto armado y desastres de origen natural, mientras el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes proyecta que en 2023 cerca de 3

millones de personas requerirán asistencia por causas de Violencia Basada en Género.

El hambre, consecuencia de la desigualdad, la exclusión y la violencia, pone a las mujeres en el centro de nuestro trabajo en América Latina. Por eso, hemos decidido dedicar esta publicación a describir lo que observamos en los territorios donde trabajamos, y que esperamos sirva de alerta y contribuya a visibilizar más las necesidades y la urgencia de actuar desde la perspectiva de la asistencia inmediata, pero también para **promover un cambio profundo y duradero. Un cambio que reduzca las desigualdades y la violencia, un cambio para el cual ya están luchando muchas mujeres y hombres en la región.**

MUJERES TRABAJANDO CON MUJERES: DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE NUESTRO EQUIPO EN AMÉRICA LATINA

EQUIPO TOTAL



EQUIPO DIRECTIVO



1.

SEGURIDAD ALIMENTARIA



Mujeres y comunidades indígenas frente a la crisis del coste de la vida



La mayoría de mujeres centroamericanas cultivan una tierra que no les pertenece.

Cuando la región intentaba recuperarse del impacto de la pandemia, la guerra en Ucrania ha generado una inflación global dando lugar a una importante crisis de [coste de la vida](#).

En **Guatemala**, la tasa de inflación se ha duplicado con relación al año 2022, alcanzando el 13,2%, lo que repercute en la capacidad adquisitiva de las familias. Se trata del aumento de precios más pronunciado en los últimos 15 años. El costo de la canasta básica se encuentra en 475 USD (abril, 2023), mientras que el salario mínimo no agrícola oscila entre los 436 y 400 USD, siendo este último el salario más frecuente en las maquilas (industria manufacturera) en las que principalmente trabajan mujeres.

Según el Global Gender Gap Report 2022⁵, Guatemala es el país con la peor situación para las mujeres en toda América Latina y el Caribe, en lo que se refiere al acceso a oportunidades económicas. En este contexto es, como de costumbre, la mujer, pobre, rural e indígena la más afectada. Ante la imposibilidad de alcanzar ingresos suficientes para adquirir los alimentos básicos que requiere una familia, **la inseguridad alimentaria se convierte en una constante**. En los hogares conducidos por mujeres la inseguridad alimentaria se suma así a otro cúmulo de inequidades como las dobles y triples jornadas laborales, disparidad en el acceso a la tierra y empleo, así como a la educación y salud.

Según los últimos datos disponibles las mujeres guatemaltecas apenas poseen el 15% de la tierra para cultivar. La mayoría de las mujeres centroamericanas cultivan tierras que no les pertenece, sino que acceden a ella a través del alquiler o el préstamo. Esto implica que no pueden decidir libremente qué y cómo producir, no saben si el siguiente año podrán volver a sembrar y deben entregar una parte de la cosecha o de los beneficios al propietario de la tierra.⁶

⁵ <https://es.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2022/in-full>

⁶ Tierra para nosotras. Propuestas políticas de las mujeres rurales centroamericanas para el acceso a la tierra.

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN FAMILIAS VULNERABLES EN EL CORREDOR SECO DE CENTROAMÉRICA

Período de recolección de datos:

FEBRERO - MAYO 2023

Departamento de Chiquimula, GUATEMALA

1.128 familias encuestadas



OBJETIVO PRINCIPAL

Levantar información de línea de base del proyecto *Respuesta humanitaria a las necesidades de las poblaciones más vulnerables afectadas por el aumento de los precios de los alimentos y las catástrofes recurrentes en el Corredor Seco de Centroamérica*, financiado por ECHO, para conocer su situación en seguridad alimentaria y nutrición.

En la región Ch'orti⁷, área rural e indígena del Este de Guatemala, en el departamento de Chiquimula, las estimaciones del Gobierno e instituciones que trabajan en el ámbito de la seguridad alimentaria indican que para el período de junio-septiembre de 2023, unas 81 mil personas (30% de la población) se encontrarán en situación de Crisis o Emergencia alimentaria (Fase 3 o superior de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases - CIF)⁷.

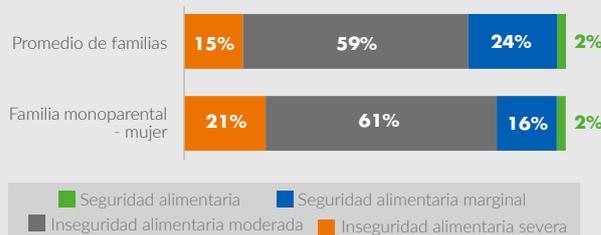
En este contexto, los resultados obtenidos se corresponden con las familias más vulnerables de las comunidades participantes.

Entre las variables evaluadas se encuentra:

- La situación nutricional de los menores de 5 años de las familias apoyadas por el proyecto.
- La situación en cuanto a consumo de alimentos e implementación de estrategias de afrontamiento.
- Presencia de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas dentro de la unidad familiar.



Las familias encuestadas son numerosas, con un promedio de 6 personas por hogar, y tres menores de edad. Las familias monoparentales lideradas por mujeres tienen en promedio 4 personas, de los cuales 2 son menores de edad, y presentan de manera significativa un nivel de inseguridad alimentaria más desfavorable que el promedio general de las familias. Más de 2 de cada 10 familias de este tipo se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa:



Esto se refleja, además, en un porcentaje muy elevado de niños y niñas con desnutrición crónica (50%), en familias monoparentales formadas por mujeres, muy por encima del promedio observado en el proyecto (32%); un porcentaje elevado de niños y niñas con bajo peso (27%) y un porcentaje más alto que el promedio del proyecto (4%) en niños y niñas con desnutrición aguda (5%), medida a través del MUAC.



La alimentación en este tipo de familias es muy pobre, basada principalmente en consumo de cereales como el maíz, acompañado con frijol, grasas y azúcar. Menos de la mitad de los días de la semana consumen proteína de origen animal, y entre 1 y 2 días por semana consumen verduras o frutas, lo que se traduce en que únicamente un 2% de las familias tengan un consumo aceptable sin implementar estrategias que merman sus condiciones de vida y opciones de futuro.



Número de días por semana que las familias implementan estrategias de supervivencia relacionadas con el consumo de alimentos.



⁷ https://www.sica.int/documentos/informe-del-analisis-de-inseguridad-alimentaria-aguda-de-la-cif-mancomunidad-trinacional-fronteriza-rio-lempa-febrero-2023-enero-2024_1_131841.html



“ He sentido un cambio en mi vida”

María Magaly

María Magaly es una joven consejera nutricional de su comunidad La Puente, Departamento de Chiquimula (Guatemala), donde promueve la participación activa de los y las jóvenes en las actividades comunitarias. Tiene 18 años y es la mayor de seis hermanos. En 2022 inició un trabajo que le permitió seguir con sus estudios de secundaria. En ausencia de becas, y ante los escasos recursos de las familias, trabajar y estudiar es la única opción para la mayoría de los y las jóvenes guatemaltecos/as.

“Mi vida antes de empezar a formarme como consejera de nutrición y salud con el apoyo de Acción contra el Hambre

era muy diferente, pero ahora sabemos que todo lo que nosotras hacemos, está saliendo bien y va llegando para el bien de nuestra comunidad y más que todo para los niños menores de dos años y mujeres embarazadas”.

Aunque inicialmente tuvo dudas sobre su participación en las consejerías, María Magaly señala que se convenció al ver el provecho que traería a su comunidad: *“Me ha gustado que hay señoras que sí practican todo lo que se les enseña en las visitas, y eso me alegra mucho, porque sé que esto trae mejoras para sus hijos e hijas, que se enferman menos y crecen mejor. Para mí es un gusto poder apoyar a toda la comunidad y a todas las personas*

que vienen de las instituciones, y que todo se pueda llevar a cabo”, dice sonriente.

María Magaly proviene de una familia rural con unos medios de vida muy limitados, de manera que la remuneración económica que recibe por su trabajo ayuda en la compra de alimentos y otros productos básicos para su familia: *“Es una gran ayuda para mí, porque antes de que comenzara no tenía dinero para vestirme, mi mamá nos compraba cuando podía o pedía fiado a una señora. Ahora me puedo vestir yo sola con el aporte que nos dan, y también ayudo un poco en mi casa”.*



NUESTRAS SOLUCIONES

En nuestras intervenciones destinadas a mejorar la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables:

- Fomentamos la toma de decisiones conjunta en la familia.
- La distribución de los roles domésticos y de los cuidados para facilitar la participación de las mujeres en espacios comunitarios y locales, y que todo ello no implique una carga más para ellas.
- Promovemos la autonomía económica de las mujeres brindando acceso a recursos financieros y técnicos que les permita acceder a empleos dignos y con sus prestaciones de ley.

Las mujeres históricamente han sido educadas para asumir los roles domésticos y de cuidado en la familia, lo que ha implicado una carga perenne para todas las mujeres de la casa, sacrificando su alimentación o la calidad de la misma, para garantizar que sus hijos e hijas y esposos tengan alimentos.



Mujeres y niñas sufren mayores restricciones como consecuencia de la violencia armada

El 30% de la población colombiana (15.5 millones de personas) se enfrentan a altos niveles de inseguridad alimentaria⁸.

En el año 2020, 43,4% de las mujeres (10,8 millones) y 41,7% de los hombres (10,1 millones) hacían parte de hogares en situación de pobreza monetaria⁹. Estas brechas se incrementaron para las mujeres durante la pandemia, por cuenta de la inequidad en distribuciones de actividades de cuidado (50.6 horas semanales para las mujeres y 23.4 para los hombres) y la pérdida de empleos en los sectores más afectados y con mayor involucramiento femenino, como los sectores turísticos y comerciales¹⁰.

Los hogares que presentan inseguridad alimentaria son principalmente aquellos con jefatura femenina (36%), frente a los de jefatura masculina (27%). Este porcentaje se incrementa en los hogares con jefatura monoparental femenina con un 43%. Además, según el informe de evaluación de seguridad alimentaria de PMA (2023)¹¹, en el 24% de los hogares monoparentales con jefatura femenina, las mujeres han tenido que utilizar estrategias negativas de afrontamiento frente a la inseguridad alimentaria, como pedir ayuda en la calle y vender enseres, entre otros. En los contextos rurales donde desarrollamos el 40% de nuestras intervenciones, las brechas de género también se incrementan. Según cifras del DANE, las mujeres rurales en Colombia (5,8 millones) representan el 12% del total de la población del país y el 48% de la población rural (12,1 millones). De los 3,8 millones de hogares en zonas rurales, las mujeres encabezan el 32% (1,2 millones), en donde el 69% de estos hogares son monoparentales (825.600 hogares).



⁸ Programa Mundial de Alimentos (2023) Evaluación de seguridad alimentaria para población colombiana.

⁹ Programa Mundial de Alimentos (2023) Evaluación de seguridad alimentaria para población colombiana. Pag 4.

¹⁰ ONU Mujeres (2021) Dimensión de género en la crisis del Covid-19 en Colombia: Impactos e implicaciones son directes para hombre y mujeres. Publicación. Bogotá.

¹¹ Programa Mundial de Alimentos (2023) Evaluación de seguridad alimentaria para población colombiana. Pag 4



En las áreas rurales de Colombia, uno de los factores que incide en la inseguridad alimentaria son las dinámicas de la violencia armada, así como hemos podido constatar en el monitoreo que realizamos en el marco del proyecto **"Hambre y Conflicto"**.¹²

Las restricciones en la movilidad establecidas por los Grupos Armados No Estatales tienen un alto impacto en las dinámicas culturales de las comunidades campesinas e indígenas y sus procesos productivos, como también en la gestión de las dinámicas comunitarias y domésticas, **afectando en especial la seguridad y autonomía de las mujeres y niñas.**



- Restringir el acceso a fuentes de agua, zonas de cultivo y pesca, así como el espacio de intercambio, constituye una de las principales afectaciones en la dinámica actual del conflicto bajo el modelo de confinamiento y restricciones a la movilidad en comunidades.
- Para las mujeres y niñas, las restricciones ligadas a la violencia significan reducir aún más su movilidad, afectada ya previamente por los roles preestablecidos en las comunidades rurales, priorizando el desplazamiento de los hombres y adolescentes varones por los riesgos de contexto y excluyéndolas de roles productivos o de generación de ingresos.

Estos factores disminuyen los aportes económicos generados por las mujeres, incrementando su dependencia frente a los integrantes masculinos del hogar.



De hecho, el 100% de las personas entrevistadas mencionaban que las mujeres, como responsables del consumo y alimentación en el hogar:



Debían adoptar estrategias de afrontamiento negativas tales como reducir el consumo de 1-2 comidas al día



El 63,2% identificaban que finalizadas las comidas sus familias todavía tenían hambre.

Esto generaba una alta preocupación y manejo de la carga y estrés para las mujeres que sentían que no estaban alimentando de manera adecuada al núcleo familiar.

La percepción general es que la **reducción de porciones en los alimentos es mucho mayor y frecuente para las mujeres, en función de priorizar un mayor volumen de alimento a hombres (fuerza de trabajo remunerado) y niños/niñas**, lo que las hace más vulnerables a problemáticas relacionadas a su salud y nutrición y seguridad alimentaria en general.

¹² Proyecto financiado por ECHO y AECID desde el 2022



“ Yo sé que mis estudiantes vienen sin desayunar y cuando vuelven a sus casas no prueban bocado de comida ”

Ángela - Profesora en Putumayo

En una de las comunidades de Putumayo que ha sido constantemente afectada por la presencia de distintos Grupos Armados No Estatales, vive Ángela, una profesora que sabe que su labor garantiza no solo la educación, sino también, la seguridad alimentaria de los niños y niñas. Para la escuela, no fue fácil encontrar una docente que permaneciera en la vereda, ya que han ocurrido hechos de violencia que han dejado una huella imborrable en la comunidad. En total hay 14 estudiantes matriculados en la escuela, de ellos, solo 5 tienen acceso a alimentación escolar, *“Yo también tomo de mi salario para ellos, no los voy a dejar aguantando hambre, si tenemos comida para 5 la multiplicamos para los 14, yo sé que vienen sin desayunar y cuando vuelven a sus casas no prueban bocado de comida”*, indica Ángela, quien no solo destina de sus recursos para la alimentación de sus estudiantes, sino también para materiales educativos.

La profesora se ha encargado de

mantener y financiar las necesidades que hay en la escuela, y cada día destina 4 horas para preparar los alimentos a su grupo de estudiantes, *“estamos en una zona de conflicto y es difícil para las mujeres llevar a sus hijos e hijas a la escuela porque hay muchos peligros, además yo sé que ellas no tienen para darle todas las comidas a sus hijos e hijas, y muchas veces dejan de comer por alimentarlos”*.

Estar en medio de una zona en constante conflicto armado, que restringe la movilidad y el acceso a los alimentos, pone en riesgo la seguridad alimentaria de las personas. Para Ángela, financiar y preparar los alimentos de sus estudiantes afecta los ingresos destinados a su propio sustento y el de su familia, llevándola a vivir en la bodega de la escuela, sin la posibilidad de acceder a una vivienda digna, *“Yo me salto el desayuno porque hay que hacer rendir la comida, al almuerzo siempre como mi arroz y los frijoles o lentejas [...] podría pagar por mi almuerzo, pero*

también tengo mis deudas y como no vivo con mi esposo ni mis hijos, sino que vivo en la escuela, les tengo que enviar plata cada mes para que alcancen a cubrir los gastos”. Así mismo, sabe que nunca obtendrá remuneración por cuidar y proteger a sus estudiantes, pero también tiene la certeza de que está cumpliendo con su vocación.

Ángela y su escuela, así como la comunidad en que habita, fueron parte de nuestro proyecto “Alianza Amazonía”, a través del cual hemos proporcionado filtros de arcilla que les permiten acceso a agua potable. Este proyecto se centra en la atención de zonas rurales de difícil acceso en la región amazónica colombiana, conectando y atendiendo poblaciones donde el acceso humanitario institucional y de servicios básicos es limitado.

2.

MEDIOS DE VIDA





La desigualdad de género y la falta de oportunidades económicas y formativas también limitan el desarrollo personal y colectivo.

El rol clave de las mujeres en las cooperativas agrícolas de Nicaragua

En Nicaragua, las mujeres rurales desempeñan un papel clave como productoras de alimentos, representando el 44% de las membresías en cooperativistas agrícolas¹⁶.

Sin embargo, debido a los roles tradicionales de género, sus contribuciones suelen pasar desapercibidas. Se considera que el papel principal de las mujeres está en el cuidado de la familia, asumiendo la responsabilidad completa del trabajo doméstico. **La desigualdad de género y la falta de oportunidades económicas y formativas también limitan su desarrollo personal y colectivo.**

A pesar de que ha habido aparentes avances en legislación y políticas públicas en las últimas décadas, aproximadamente el **65% de las mujeres no son propietarias de la tierra que trabajan y con ello tienen dificultades para acceder a préstamos**; solo el 11% del crédito asignado a áreas rurales se destina o es gestionado por mujeres.

Este año, la producción agrícola se verá afectada debido al fenómeno de El Niño, que se estima provocará cambios meteorológicos extremos en forma de sequía en Centroamérica, lo que a su vez llevará a otro aumento en los precios de los alimentos. Esto impactará de manera notable entre las y los pequeños agricultores que ya se

han visto afectados por la pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania, según el informe de la FAO y el PMA¹⁷.

El alza en los precios de los fertilizantes e insumos agrícolas ha impactado significativamente en las comunidades rurales, en especial entre las mujeres que participan en la agricultura, acrecentando las dificultades económicas, limitando su acceso a los insumos necesarios y con ello mermando la productividad de sus cultivos.


 IGUALDAD

¹⁶ <https://www.unan.edu.ni/wp-content/uploads/unan-managua-semanario-cedmeb-no-37.pdf>

¹⁷ https://www.sica.int/documentos/global-report-on-food-crises-2023-grfc-2023-fsin-and-global-network-against-food-crises-2023_1_131940.html

1

Diagnóstico con enfoque de género centrado en las prioridades y problemas percibidos por los y las socios/as de cooperativistas en Nicaragua en los ámbitos económico-productivo, organizativo y comunitario

Periodo de recolección de datos:

PRIMEROS MESES DE 2021



49 personas en grupos focales



86 personas por medio de encuestas

Entre los principales hallazgos del estudio destaca la percepción de que las mujeres enfrentan mayores limitaciones frente a los hombres para acceder a recursos de apoyo a la producción y desarrollo de sus propios emprendimientos, aunque, la mayor parte de las entrevistadas y participantes en grupos focales coincidían en que las decisiones sobre el destino de los recursos obtenidos por sus actividades productivas las tomaban ellas.



2

Estudio de línea base a fin de conocer mejor las condiciones de vida de las mujeres campesinas

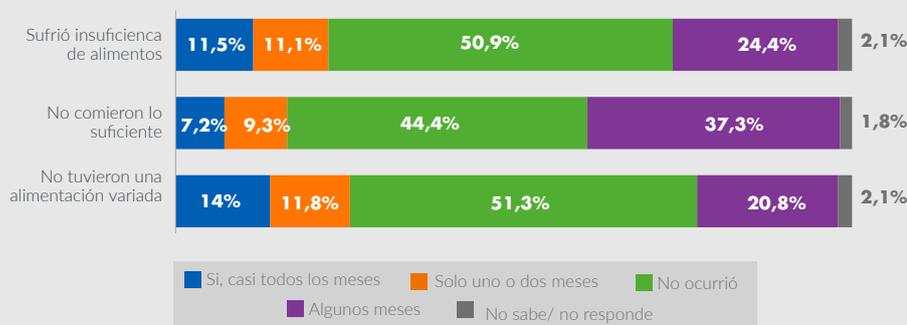
A finales del año 2021, en el marco del proyecto Fortalecimiento de iniciativas de economía social y empoderamiento de mujeres y jóvenes rurales en el Corredor Seco Nicaragüense, financiado por la Generalitat de Valencia, se realizó a las mujeres campesinas que participan en esta iniciativa a través de cooperativas.



Este proyecto ha contribuido a fortalecer el funcionamiento de cuatro cooperativas con un total de 930 personas, de las que el 53% son mujeres, lo que supone un importante logro.

Sin embargo, la vida cotidiana de los y las socios/as de estas cooperativas transcurre en territorios muy afectados por la variabilidad climática, impactando de forma negativa en sus medios de vida.

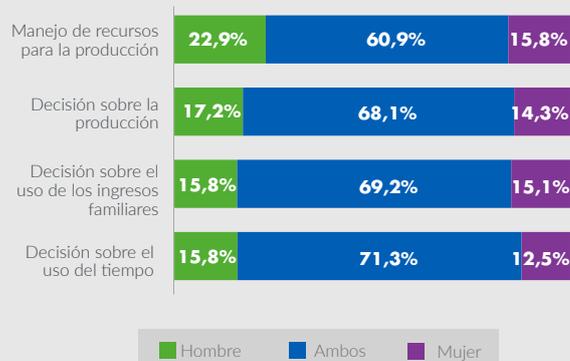
La fragilidad de estos medios de vida, y el bajo ingreso que perciben, especialmente las mujeres participantes, conlleva un riesgo de deterioro alimentario, lo que se ve reflejado en sus indicadores de seguridad alimentaria y nutricional:



El cooperativismo surge como respuesta de los pequeños productores para poder obtener mejores beneficios en su producción. En términos generales, las y los cooperativistas buscan garantizar la sostenibilidad de sus sistemas productivos manteniendo el equilibrio entre necesidades e intereses de los asociados.

- La percepción general inicial identificada en el estudio es positiva: se ha constatado que las cooperativas favorecen la actividad económica y con ello mejoran los resultados de los y las productores.
- El 69% de los y las encuestados conocía las políticas de género de sus respectivas cooperativas con el fin de aumentar la equidad, lo que evidencia un avance respecto a periodos en los que la temática era del todo desconocida, aunque todavía queda un 30% de socios/as que desconoce el tema y su relevancia.

Para poder medir el empoderamiento de las mujeres agricultoras, se utilizó el Índice de Empoderamiento de la Mujer en la Agricultura (WEAI), que permite medir el grado de inclusión de las mujeres en el sector agrícola. Este índice, analiza una serie de dimensiones que permiten medir el acceso a los recursos de las mujeres:



Pese a que la mayor parte de las decisiones son tomadas de manera conjunta, en segundo lugar, siempre aparece el hombre como tomador de decisión. El proyecto implementado, y las actividades que desde Acción contra el Hambre y las cooperativas socias seguiremos impulsando durante los próximos años permitirán fortalecer el liderazgo y autonomía que promueva cambios positivos en la toma de decisiones de las mujeres dentro de las cooperativas productivas.

Marbely González preside Cotucproma desde hace seis años, pero su incursión al mundo cooperativo la hizo hace 10 años.

El recorrido no ha sido fácil. *“Al principio fue un poco duro, porque hacíamos las propuestas a la Asamblea y ellos obviaban esas iniciativas para mejorar la cooperativa, pero luego tuve que tomar un poco más de fuerza y proponer un poco más fuerte las ideas, empoderarme un poco más enfrente de la Asamblea para que ellos pudieran tener la confianza en que nosotros las mujeres podíamos, y así, me fui ganando los espacios [...] y eso fue como una forma de sensibilización, porque las mujeres sí podemos trabajar y podemos gobernar también”.*

Marbely añade que *“la experiencia ha sido retadora, porque a nivel personal me ha generado muchos cambios, me he empoderado como mujer tanto en la cooperativa como en el hogar: ha sido un gran desafío para mí, del que ahora me siento muy orgullosa”.*

Destaca que ella ha recibido formación y que eso le ha ayudado en gran medida; *“Ha sido de mucho aprendizaje, porque me he ido formando [...] y me ha dado fuerza para trabajar en una cooperativa que estaba iniciando, pues necesitaba muchos conocimientos, entonces el primer año que yo estuve en los órganos de dirección flaqueé un poco, porque me sentía que no tenía el empoderamiento, pero luego estuve en varias formaciones y yo misma hacía mis autoanálisis [...], entonces de ahí empecé a no tener miedo de proponer y hacer cosas [...] ser capaz de proponerlas y de liderar su puesta en marcha”.*

Marbely considera que la participación de mujeres fortalece a las cooperativas *“porque las mujeres somos creativas, tenemos buenas ideas, somos luchadoras y creo que eso hace que se fortalezca y consolide la visión de la cooperativa”.*



Las mujeres podemos trabajar y podemos gobernar también”

Marbely Salvadora González González presidenta de la Cooperativa de Turismo Comunitario Protectores del Medio Ambiente (Cotucproma)



NUESTRAS SOLUCIONES

En Acción contra el Hambre apostamos por seguir trabajando con las cooperativas, a las que consideramos como el mejor instrumento para la inclusión económica y social en territorios rurales ya que, frente a un/a productor/a individual, las cooperativas mejoran la gestión, reducen costos de transacción y aumentan productividad, al tiempo que generan mayores volúmenes y fuerza en negociaciones.

- Además, tienen un funcionamiento democrático, lo que ofrece la posibilidad de participar en igualdad de condiciones a mujeres campesinas y jóvenes.
- A las cooperativas se les reconoce la capacidad de influencia y liderazgo en los territorios, al representar los intereses de centenares de familias. A menudo, también funcionan como plataformas de servicios básicos en zonas aisladas mediante los que ofrecen servicios de asistencia técnica, acceso a crédito, la posibilidad de comprar insumos y alimentos o la interacción con innovaciones productivas.



Mujeres fuertes en territorios difíciles



Según los datos del Informe “Perú: Brechas de Género 2020” (INEI), **el 43,5% de mujeres rurales manifiesta no contar con ingresos propios**, mientras que en los hombres esta cifra representaba al 12,7%. En la misma línea, la FAO (*Food and Agriculture Organization*) reporta que las mujeres en las áreas

rurales tienen menor acceso a la tenencia de tierras, además de menor acceso a créditos y seguros para potenciar su trabajo agrícola.¹⁸ Por esta razón es importante promover el acceso a medios de vida en entornos rurales por parte de las mujeres, empezando por reforzar sus habilidades técnicas.



Ayacucho, ubicado en el sur andino peruano, es uno de los lugares más amenazados por la inseguridad alimentaria en el país. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en 2022, el 50,7% de menores de 5 años presentó anemia y la desnutrición crónica infantil ha llegado al 19,2%. Ambas cifras superan a las registradas en 2021.

En el distrito de Santillana, donde implementamos el proyecto “Alimentación, salud, equidad de género en familias vulnerables altoandinas”, durante los últimos años los padres (55,3%) y otros varones del hogar (17,4%) habían tenido mayor participación en las actividades formativas que las madres (40,9%) y otras mujeres del hogar (7,6%). Mientras que en las áreas urbanas fueron las madres las que declararon mayor participación (59,1%), en las áreas rurales, fueron los padres los que asistieron con mayor frecuencia a las capacitaciones (58,0%).

Esta distribución desigual se observó también en los procesos de toma de decisiones. Según el estudio, un 45,2% de las mujeres consultadas reportó no participar en el 100% de las decisiones y un 24% participar en menos de la mitad. Estas cifras se tuvieron en cuenta para rediseñar la intervención, asegurando que las mujeres contaran con espacios de participación y toma de decisiones.



En el acceso a medios de vida de las mujeres rurales, las organizaciones de base juegan un rol fundamental. Sin embargo, dichas organizaciones pueden presentar debilidades, siendo necesario incorporar instrumentos de gestión, así como capacidades para el desarrollo de propuestas técnicas, y mecanismos de coordinación entre actores locales, de forma que se acceda a mayor diversidad de recursos financieros y de capital humano.

¹⁸ <https://www.fao.org/3/ca5092es/ca5092es.pdf>
<https://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/320313/>



Me dedico a la agricultura y ganadería para mantener a mis cuatro hijos"

Dora Prado



En algunas zonas rurales, a la pobreza se suman las dificultades por las bajas temperaturas y los traumas derivados del terrorismo. Uno de esos sitios es el centro poblado de Porta Cruz (en la provincia de Huanca Sancos - Ayacucho), donde la señora Dora Prado trata de sacar adelante a sus cuatro hijos con la venta de lácteos que ella misma produce, gracias al impulso económico que le dio el proyecto "Vives Emprende" de Acción contra el Hambre.

"Me dedico a la agricultura y ganadería para mantener a mis cuatro hijos. Mi esposo está enfermo en Lima hace tiempo", cuenta. Ella tiene a su pareja en

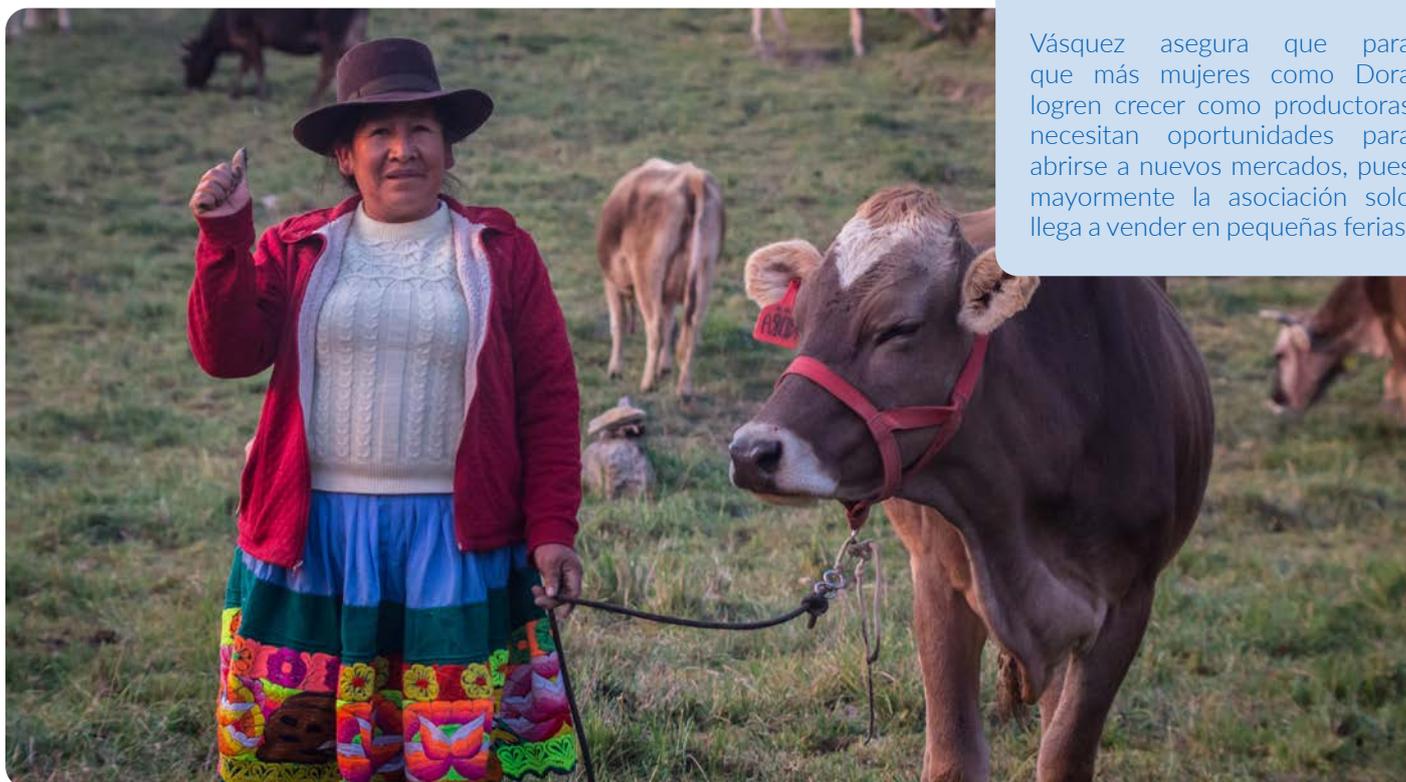
tratamiento y desde hace tres años se encarga de ser padre y madre en casa. Se dedica a la comercialización de yogurt, queso, manjar blanco y licor de leche, y busca oportunidades para crecer como emprendedora, pues solo logra vender en una comunidad cercana.

Dora enfrenta la ausencia de su esposo, la dureza de las heladas que azota a sus animales, además de la falta de infraestructura y dinero para llevar sus productos a ciudades con más clientes potenciales. A pesar de ello, busca la forma de darle educación y alimentación a sus niños menores, pues los mayores se encargan de apoyar en el negocio.



Una de las personas que conoce el caso de Dora es Conny Vásquez, administradora de profesión, que se desempeña como facilitadora del programa de emprendimiento. Ella reconoce la persistencia de la productora por no decaer, a pesar de enfrentar dificultades. *"Dora pertenece a una asociación de madres emprendedoras que inició con 60 miembros, a pesar de las adversidades, ella se mantiene junto otras once mujeres".*

Vásquez asegura que para que más mujeres como Dora logren crecer como productoras necesitan oportunidades para abrirse a nuevos mercados, pues mayormente la asociación solo llega a vender en pequeñas ferias.



Dora pastoreando a su ganado vacuno en Ayacucho la provincia de Huanca Sancos, en el distrito de Portacruz.

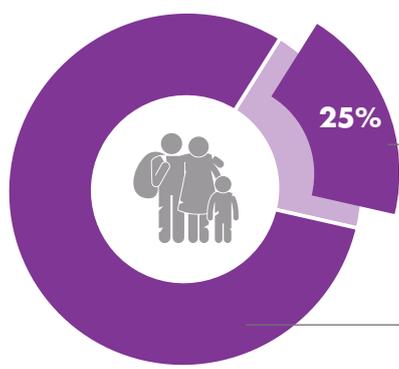
3.

MIGRACIÓN





PERSONAS MIGRANTES ATENDIDAS POR ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE EN LA REGIÓN



Mujeres y niñas migrantes están expuestas a múltiples riesgos

“La movilidad humana en América Latina y el Caribe muestra que cada día es más intensa la presencia de las mujeres, las niñas, las jóvenes y las/os adolescentes LGBTIQ+ viviendo en situaciones de vulnerabilidad con necesidades específicas”.²¹

El fenómeno migratorio en Centroamérica afecta especialmente a mujeres y niñas, quienes enfrentan desafíos en todas las etapas de su trayecto.

Estas personas se enfrentan a diversos riesgos y violaciones de sus derechos tanto en su país de origen como durante el proceso de migración. **Entre los principales riesgos se encuentran la discriminación y la violencia basada en género**, la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, el desempleo, la pobreza, la mendicidad, la falta de acceso a alimentos y medicamentos, entre otros. Estos riesgos se intensifican si mujeres, niñas y adolescentes se encuentran en situación migratoria irregular.

Entre las motivaciones de las mujeres para emigrar destaca su propósito de brindar un mejor futuro para sus hijos. Casi el 40% de las mujeres ha tenido que pedir un préstamo para realizar el viaje migratorio o han recurrido a sus ahorros por trabajo (25%) y ahorro por venta de posesiones (17%)²².

Por lo general, ante los altos cobros a las que son sometidas en los países de tránsito o los asaltos, terminan sin dinero para costear el viaje, **por lo que se ven forzadas a trabajar de forma precaria o a caer en mendicidad**, lo que agrava las situaciones dolorosas y traumas que ya de por sí viven durante un recorrido migratorio de hasta 7.000 Km en algunos casos, que se extiende a lo largo de semanas.



Las mujeres dedican migrar motivadas por brindarles un mejor futuro para sus hijos e hijas.

²¹ <https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/mujeres-ninas-migrantes-buscan-futuro-mejor-centroamerica>

²² https://www.linkedin.com/posts/acci%C3%B3n-contra-el-hambre-centroam%C3%A9rica-2a92b6176_informe-de-situaci%C3%B3n-consorcio-life-honduras-activity-7065138943784038400-3TFy?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Liriana y su familia seguirán viajando a pesar de las dificultades



“Soy Liriana, tengo 24 años, tengo 2 hijos y venimos de Ecuador, con mi esposo, somos venezolanos, estuvimos viviendo 4 años en Ecuador. Mi hijo mayor es venezolano, mi hijo menor es de Ecuador. En Ecuador yo trabajaba en estadísticas de salud y mi esposo, en cualquier cosa que le saliera.”

La decisión de emigrar de Liriana y su familia no fue fácil, al contrario *“ha sido complicado, porque dejar a nuestra familia es duro. Fue una decisión difícil de tomar para los dos”*. Salieron con 100 USD en

el bolsillo, la cifra que lograron reunir para emigrar. Nunca se había propuesto viajar a Estados Unidos por vías legales, sino que decidieron intentarlo *“cuando pusieron el beneficio de viajar cuando uno tuviera familiares en Estados Unidos”, pero no lo consiguieron. “Lo intenté y no tuve respuesta de parte de mis familiares que están allá. Por eso nunca emití la solicitud con el programa”*, explica Liriana.

Según ella el trayecto desde Ecuador hasta Honduras *“ha sido complicado, porque ahorita todo es dinero y no*

contamos con los recursos para seguir adelante”, dice Liriana. Agrega que lo más duro para su familia ha sido *“enfermarnos, porque así no podemos continuar”*. La entrada en vigor en mayo del Título 8, una norma que se aplica a las personas migrantes irregulares que llegan a Estados Unidos, aumenta el riesgo de deportación a sus países de origen de las personas migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, pero esto no detiene a familias como las de Liriana; continuarán su viaje.



“

Vendemos bolígrafos para poder seguir adelante”

Ruth Mari Segovia

“Mi nombre es Ruth Mari Segovia, tengo 27 años y viajo con mi hija y mi hijo. Tomé la decisión de salir de mi país, porque la economía no está nada bien. Salí a Colombia primero, luego a Ecuador, no me fue muy bien tampoco y tomé la decisión de emigrar a Estados Unidos”.

Ruth cruzó la selva del Darién y al salir su niña tenía mucha fiebre, diarrea y vómitos. *“Nosotros tomábamos agua de esos ríos, que la verdad estaban super contaminados y la tuve que llevar al médico en Panamá”*.

Recuerda que recibió apoyo de la Policía para que su hija recibiera atención médica y medicamentos. *“Le bajó la fiebre, le dieron los remedios. A él (su hijo) no le dio nada, gracias a Dios a mí tampoco”*. Ruth Mari y sus hijos se unieron en el camino hacia Honduras a un grupo. Dice que cruzaron Nicaragua de un tirón, porque les dijeron que era mejor descansar en Honduras, donde podía encontrar refugio y apoyo.

“En todos los países la verdad dormía en la calle. En los pueblos de Costa Rica

dormíamos en carpas, hasta que llegamos a la capital y ahí estuvimos en un refugio tres días, y continuamos hasta la frontera, nos ayudaron a ir en bus”.

“Nosotros vendemos bolígrafos, así poco a poco hemos ido avanzando, o regalamos los bolígrafos por cualquier moneda que nos apoyen. Hubo veces que hacía 20 dólares, 15, 30, depende. Este dinero lo uso para comida, pasajes (transporte) y cosas así”, explica.



En alianza con UNICEF, desde septiembre de 2022, estamos atendiendo a la población migrante en la frontera sur de Honduras.

En mayo de 2023, realizamos **más de 3.400 encuestas principalmente a grupos familiares** que pasan por las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Danlí y Trojes, y familias que pernoctan en los Centros de Descanso Temporal gestionados por organizaciones socias del Consorcio LIFE.



Un dato destacado es la forma de viajar de las mujeres:

- Mientras que solo el 41% de los hombres viaja en grupos familiares, este porcentaje aumenta al 72% en el caso de las mujeres.
- Solo el 15% de las mujeres viaja sola, y el 4% viaja con desconocidos.

Además, dentro de los grupos familiares, el 25% de las mujeres viajan solas con sus hijos e hijas (frente al 15% de los hombres que viajan solos en compañía de sus hijos).

Se observa un mayor nivel de vulnerabilidad de las mujeres ante los peligros durante el viaje.

En promedio, los grupos familiares están compuestos por dos adultos y dos menores de edad.



Los hombres que viajan sin mujeres adultas lo hacen junto de otro adulto hombre y un niño o niña.



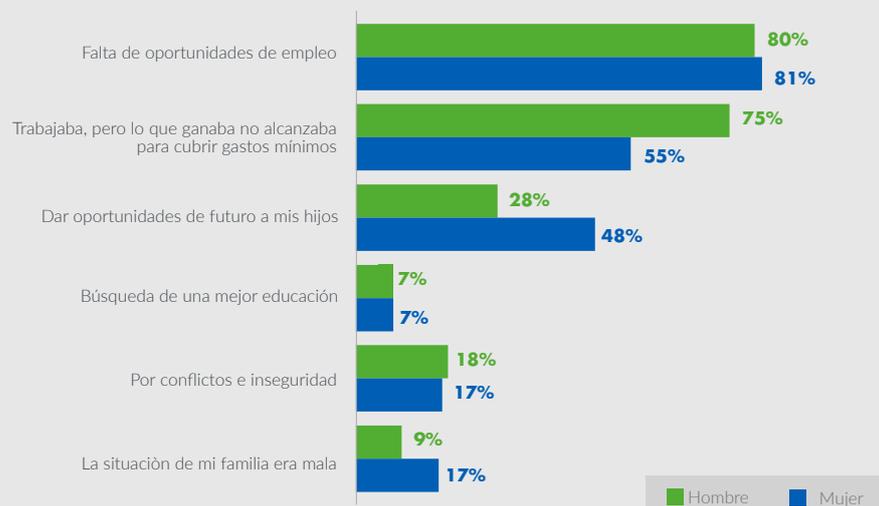
En el caso de las mujeres que viajan de forma monoparental, lo hacen con dos niños o niñas.

El 75% de las mujeres que viajan solas con sus hijos, llevan al menos un menor de 5 años, y el 8% viaja con un niño o niña con discapacidad.

El porcentaje de niños y niñas menores de 5 años es muy similar al caso de las familias biparentales, pero el porcentaje de personas con discapacidad es superior al observado en familias biparentales (5%) o monoparentales con un hombre (4%).

Además, un cuarto de las mujeres que viajaban solas ha optado por contratar coyotes que las guíe en el camino en sus distintos tramos.

Las diferencias en la forma de viajar se reflejan también en las principales motivaciones entre hombres y mujeres. Casi la mitad de las mujeres están viajando para brindar mejores oportunidades a sus hijos e hijas, aunque las principales motivaciones son económicas:



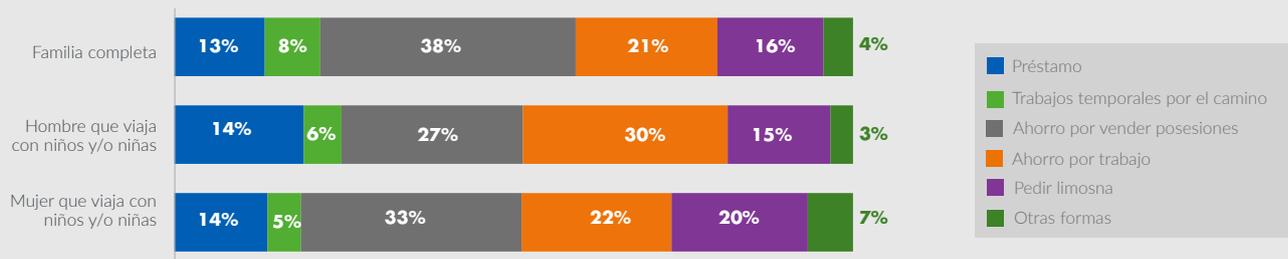
A la falta de recursos para afrontar el trayecto se suma la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Según la encuesta, la mayoría financia su viaje a través de préstamos.

Sin embargo, en el caso de los grupos familiares, tuvieron que vender todas sus posesiones para iniciar el viaje. Esto significa que, aunque un pequeño porcentaje de los encuestados considere regresar a su país debido a los cambios legislativos estadounidenses, no cuentan con bienes o recursos en sus lugares de origen para poder instalarse e iniciar una nueva vida.



Resulta de notable preocupación el hecho de que un porcentaje significativo de familias monoparentales encabezadas por mujeres esté recurriendo a la mendicidad para poder continuar su camino:

FINANCIACIÓN DEL VIAJE SEGÚN EL TIPO DE FAMILIA ENCUESTADA

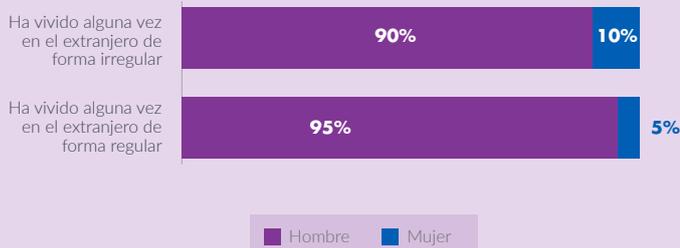


NUESTRAS SOLUCIONES

En términos generales, entre el 30 y 40 por ciento de las familias que habitan la Región Occidental de Guatemala tienen al menos a uno de sus integrantes emigrado a Estados Unidos. Emigrar se ha convertido en una de las alternativas más comunes entre la población guatemalteca ante la dificultad para acceder a empleo y unas condiciones de vida dignas.

De acuerdo con la investigación llevada a cabo por Acción contra el Hambre a finales de 2022 con apoyo de OIM y USAID con el objetivo de determinar cual era el impacto de las experiencias migratorias en las condiciones de vida de los hogares y comunidades de origen, de cada 10 migrantes irregulares solo 1 es mujer. Cuando la emigración se produce de manera regular, es decir, con visa y con un contrato laboral de duración determinada tras el cual se regresa al país de origen, la participación de las mujeres disminuye hasta una proporción en la que solo una mujer de cada 20 migrantes hombres tiene acceso a los canales regulares y seguros ligados a los programas de emigración temporal o circular.

Formas de migrar



Desafíos y oportunidades para mujeres migrantes en Colombia



Hay mayor riesgo de discriminación en el trabajo para las mujeres migrantes.

En Colombia, hay más de 2.4 millones de personas migrantes, el 14,9% de ellas son niñas y adolescentes y 37,7% mujeres adultas, que suelen estar más expuestas a actos de violencia, incluida la violencia de género.

De hecho, los análisis situacionales reflejan que para las mujeres migrantes en Colombia hay mayor riesgo de discriminación en el trabajo y una dificultad adicional para acceder a condiciones laborales justas. Según información publicada por el DANE²³ referente a empleabilidad, las mujeres migrantes tienen una carga de trabajo en el hogar (no remunerado) mayor a la carga que enfrentan las mujeres

colombianas en general, con un 53,1% que declaran dedicar más de 20 horas semanales al cuidado de niños y niñas, frente a un 30,6% en el caso de las mujeres colombianas. El 55,4% de las mujeres migrantes manifiestan que no pueden movilizarse para conseguir empleo a causa de las responsabilidades familiares y, por ende, no puede acceder a mejores condiciones de vida.

²³ DANE. Obtenido de <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/enfoque-diferencial-e-interseccional/enfoque-de-genero>



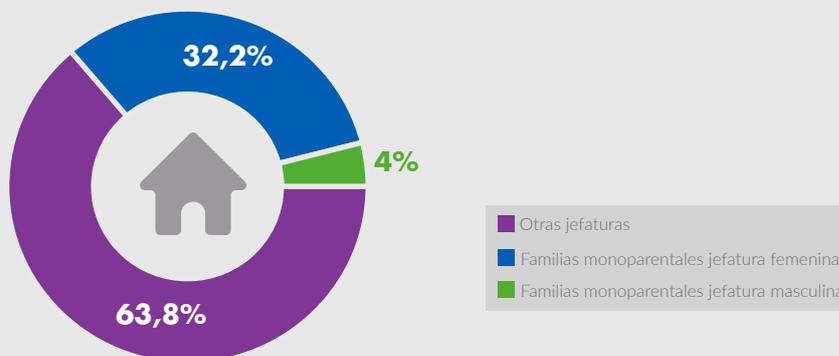
Entre agosto y septiembre de 2022, el Consorcio Cash for Urban Assistance (CUA), realizó junto con la firma ISEGORIA, un análisis de género, para reconocer los efectos diferenciados positivos y negativos en la población participante del programa ADN Dignidad²⁴, que apoya población migrante y retornada de Venezuela y las comunidades que las acogen en Colombia.

En el análisis, participaron 87 personas en 35 actividades; 59,7% mujeres y 40,3% hombres, con quienes se realizaron entrevistas semiestructuradas y grupos focales.

Se contrastó la información con fuentes secundarias como documentos sobre programas de transferencias monetarias a nivel mundial con temáticas de género e identificación de riesgos, con estudios de empleabilidad, emprendimiento y acceso al ahorro y a servicios financieros, y con manuales operativos del propio programa.

La revisión de esta amplia literatura señala que las barreras laborales diferenciales a las cuales se enfrentan las mujeres migrantes en Colombia son: la maternidad y/o responsabilidad de ser cuidadora, la falta de redes de apoyo, la xenofobia y los estereotipos sobre roles de mujeres en el mercado laboral. A continuación, se presentan los principales hallazgos del estudio:

- JEFATURA DEL HOGAR



- **Roles y responsabilidades:** Un 36,2% de los hogares participantes del programa son hogares monoparentales. Dentro de estos hogares, la jefatura la ejercen principalmente las mujeres con un 32,2% frente a un 4% de los hombres. La mayor parte de personas registradas como representantes de los hogares en el programa son mujeres. La titularidad frente al programa ha permitido que las mujeres participen más en la toma de decisiones sobre el uso de recursos y manejo de las transferencias monetarias en su espacio doméstico. Sin embargo, una recomendación identificada es la de trabajar en cambiar la percepción de que ellas son quienes asisten a las actividades relacionadas con el programa, pues se considera que son quienes tienen más tiempo libre.

- **En cuanto a las personas migrantes LGBTIQ+:** Los roles y responsabilidades resultan difusos en su cotidianidad ya que necesitan generar ingresos en el sector informal, lo que les lleva a establecer acuerdos o pactos de solidaridad con quienes les rodean. Se trata de población que se ubica en contextos predominantemente poco inclusivos e inseguros.

- **Riesgos de protección:** Al preguntar a las personas participantes sobre los riesgos de seguridad que tienen las niñas, las adolescentes y las mujeres dentro de sus hogares, reportan que se presentan casos de violencia de pareja, así como casos de maltrato infantil, principalmente castigo físico. Las mujeres, las adolescentes y las niñas tienen mayor riesgo de ser víctimas de violencia sexual dentro y fuera de sus hogares.

- **Acceso a servicios financieros, empleabilidad y emprendimiento:** Es usual que los hombres trabajen como ayudantes de construcción, repartidores de bienes y servicios a domicilio, cuidando vehículos en las calles, como recicladores, realizando ventas ambulantes, como mecánicos, moto o bici, o como taxistas. En cuanto a las actividades remuneradas de las mujeres, éstas suelen dedicarse al servicio doméstico, a trabajar en restaurantes o cafeterías e iniciar emprendimientos personales informales, como venta de alimentos, sastrería y servicios de manicura o peluquería, entre otros.

²⁴ <https://www.adndignidad.co/>



Otro estudio realizado por la *International Initiative for Impact Evaluation (3iE)* para medir el impacto del programa ADN Dignidad en los participantes hasta 3 meses después de terminada la provisión de ayuda humanitaria, evidenció que los ingresos mensuales de quienes participaron en el programa aumentaron en un 15% en promedio.

El estudio reflejó que hay un impacto significativo y positivo en el ahorro de los y las participantes y una notable reducción en sus deudas, así como una mayor probabilidad, para las mujeres, de generar o tener un negocio propio.



Te enfrentas a muchos peligros [...] buscan mujeres para aprovecharse de ellas"

Estrella



Estrella es una mujer de 30 años, madre de dos niñas, con unas inmensas ganas de salir adelante.

Llegó a Colombia desde su natal Venezuela. En su tránsito hacia el país, superó muchas dificultades ya que tuvo que enfrentarse a la xenofobia y otros riesgos asociados al hecho de ser mujer migrante, como la falta de acceso a documentación oficial y los abusos en las "trochas" o pasos fronterizos ilegales, por personas que se aprovechan de ellas.

"Cuando viajas, si no tienes un pasaporte te enfrentas a muchos peligros; algunos maltratadores, buscan mujeres para aprovecharse de ellas. Hay migrantes que nunca llegan a su destino".

Cuando viajó junto con su madre, Estrella se encontraba embarazada y tuvo que dejar a su hija mayor en su país de origen. Cuando llegó a Colombia, no podía garantizar las condiciones básicas de vida de su familia, como el alojamiento o la alimentación. Conseguir trabajo no fue fácil, por ello, Estrella se valió de una pequeña caja llena de esmalte de uñas

que trajo consigo y comenzó a trabajar ofreciendo sus servicios.

"Tras recibir la ayuda y solucionar las necesidades de mi hogar, comencé a ofrecer servicios como estilista de uñas y poco a poco he tenido más clientas. Al principio, llegaba a casa con 2 USD en promedio ganados en un día, pero las cosas han mejorado", menciona Estrella, participante del programa ADN Dignidad.

Estrella hace parte de las más de 184 mil mujeres participantes en el programa ADN Dignidad, que entre 2019 y 2023 han recibido ayuda humanitaria a través de transferencias monetarias para la seguridad alimentaria y servicios complementarios de nutrición y protección. De ellas, más de 1.000 mujeres han participado en el componente de emprendimiento, empleabilidad y acceso a servicios financieros y grupos de ahorro.



Beneficiaria del programa de transferencias monetarias recibiendo la tarjeta.-

El acceso a programas de apoyo impulsa a las mujeres migrantes en Perú

Según la plataforma R4V son 6,1 M las personas venezolanas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe en 2023, 1,5 M en Perú, segundo país receptor en la región, después de Colombia y muy por encima de Ecuador, el tercero con alrededor de medio millón de personas refugiadas y migrantes. Según los resultados de la “Encuesta dirigida a la población venezolana en el país ENPOVE 2022” (INEI), **la población migrante venezolana femenina se ha visto incrementada en los últimos años, pasando de un 47,7% en 2018 a un 50,6% en 2022.** El 59% de las mujeres migrantes en Perú se encuentran en condición migratoria irregular, lo que puede limitar su acceso a empleo y servicios como educación, justicia y salud, además de aumentar el riesgo de ser captadas por bandas de delincuentes dedicados a la trata y explotación de personas.

Para las mujeres migrantes, la falta de acceso a programas de protección

puede dificultar su incorporación al mercado laboral, y aumentar su riesgo de inseguridad alimentaria; según ENPOVE, el 65 % de hombres tendría más ingresos que sus cónyuges, además del doble de capacidad de ahorro que la de las mujeres migrantes.

La falta de acceso a programas de protección puede dificultar su incorporación al mercado laboral.



Según el “**Estudio sobre seguridad alimentaria en población refugiada y migrante de Venezuela**” realizado por OIM y Acción contra el Hambre (2022), uno de los principales factores de inseguridad alimentaria en población migrante venezolana sería su situación económica, al no contar con recursos suficientes para su alimentación.

La población local puede acceder a programas de protección social y alimentaria, sin embargo, el acceso por parte de la población migrante y refugiada es limitado (incluso a las ollas comunes) debido a los documentos requeridos para el registro y empadronamiento.

- Esto hace que estas familias deban implementar estrategias de afrontamiento negativas como la **reducción del número de comidas diarias, reducir porciones**, priorizar la alimentación de algunos miembros de la familia o elegir insumos bajo una lógica económica.
- El estudio multisectorial que Acción contra el Hambre hizo en la población refugiada y migrante venezolana en Lima Metropolitana mostró que, en 2021, el 76,3% de hogares estaban en inseguridad alimentaria en general; mientras que el 32,8 % tendría inseguridad alimentaria severa. Para el año 2022, la situación no había variado significativamente, ya que si bien el porcentaje de prevalencia de inseguridad alimentaria se estimó en 70,5% (5,8% menos que el año anterior), la inseguridad alimentaria severa continuaba casi igual (32,2%).
- A través de los resultados de los espacios amigables para menores refugiados y migrantes implementados por Acción contra el Hambre en Lima Metropolitana, se observa como las mujeres que reciben apoyo y acceso a programas de protección, ven incrementado su acceso a medios de vida e ingresos. Según los resultados obtenidos del proyecto, el acceso al empleo en las madres cuyos hijos menores participaron del Espacio Amigable, se incrementó en 42 puntos porcentuales (de 28% a 70%), y los ingresos de las que ya trabajaban se incrementó en 26,3% (de S/, 997,7 a S/, 1.260,5).
- Esta mejora en su acceso a ingresos e independencia económica podría ayudar a reducir su vulnerabilidad no solo frente a la inseguridad alimentaria, sino también frente a la Violencia Basada en Género, la cual se acentúa en mujeres venezolanas, quienes han visto como la violencia contra ellas aumentaba un 31% entre 2019 y 2020. Factores como la xenofobia, su estatus migratorio irregular, o los prejuicios relacionados con la sexualidad percibida de las mujeres, las sitúan en una situación de alta vulnerabilidad.



Contar con un servicio para el cuidado de los niños y niñas, permiten a las mujeres tener mayor capacidad de generar ingresos

Para las familias migrantes alojadas en los albergues, contar con acceso a espacios amigables, donde sus hijos e hijas reciben cuidados y servicios de desarrollo integral, mientras las personas adultas pueden salir a buscar empleo, es de un valor incalculable.

Es por ello que, en enero, cuando el espacio tuvo que dejar de funcionar por unos meses, Deima y Yanelia, madres voluntarias, decidieron asumir el manejo temporal hasta que volviera a abrir sus puertas de manera regular. Los beneficios de un lugar con estas características son un impulso para construir el bienestar infantil y familiar. Mientras que los padres y madres dependen de la ayuda para cubrir por lo menos una necesidad básica, este espacio se entiende y se valora como fundamental. *"Por eso es que veníamos acá a ayudar a los niños y niñas, a parte que esa es mi vocación, porque yo soy profesora en educación especial. Nosotras hicimos nuestro dúo: Yaneila se encargaba de la parte de recreación y yo en la parte de la pedagogía de los niños y niñas",* explica Deima.

Del total de niños y niñas venezolanos entre 3 a 5 años de edad que viven en el Perú, el 74,7 % no asistía al colegio antes de la pandemia (INEI). Algunos de los principales motivos son la falta de ingresos y el desconocimiento sobre el sistema de educación en el país.

Para Deima los recursos que se tienen en el espacio bastan y sobran si por encima de todo prevalecen las ganas de contribuir, de generar un cambio. Leiner no sabía escribir su nombre, se sentía muy mal porque él ya tenía 10 años. *"Yo le ponía palitos para que el repasara su nombre y se quedaba contentísimo. Cuando por fin lo logró fue corriendo donde su mamá para contarle '¡mamá escribí mi nombre, escribí mi nombre!' Son cosas que realmente a uno la llena."*

Para leer más, haz clic [AQUÍ](#)



Niños y niñas participando en las sesiones de aprendizaje en los espacios amigables.

4.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA



Mortalidad materna y embarazos adolescentes en Colombia

Pese a que en Colombia existe un marco de políticas públicas robusto que reconoce y garantiza la salud sexual y reproductiva como un derecho fundamental de las personas (sin distinción de su ciclo vital, sexo, orientación sexual o identidad de género, pertenencia étnica, o situación de vulnerabilidad)²⁵, en la realidad, las brechas en el acceso a estos servicios son evidentes y afectan de manera específica a las poblaciones más pobres, que viven en zonas rurales dispersas, a las víctimas de violencia, desplazamiento, personas en condición de discapacidad y a quienes han tenido que migrar de manera forzosa desde sus lugares de origen.

De acuerdo con Profamilia y según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, que es la medición más reciente en la materia, **las mayores brechas en el acceso a métodos anticonceptivos modernos afectan a las mujeres más jóvenes**, en el quintil más bajo de riqueza y con menor nivel educativo²⁶.

Esta situación se intensifica en la población migrante y refugiada. Según la Evaluación Conjunta de Necesidades del GIFMM Colombia (junio 2021), el 24% de las personas entrevistadas manifestaron que algún miembro del hogar tuvo necesidad de atención en salud sexual y reproductiva a los 30 días anteriores a la encuesta. De estos hogares, el 51% no lograron acceder al servicio y los servicios con mayores brechas de acceso fueron ginecología, anticoncepción, prevención y tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual y/o VIH, en los departamentos de Atlántico, Nariño y Santander²⁷.

Con respecto a la reducción de la mortalidad materna, en 2021 las muertes llegaron a 83,2 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, lo que representó un retroceso de casi diez años de avance en la disminución de este indicador²⁸. Este retroceso estuvo asociado a los efectos de la COVID-19 y a los provocados por las medidas adoptadas para mitigar el impacto del virus, que afectaron la disponibilidad de servicios y personal de salud, la situación socioeconómica de las mujeres, en particular de aquellas ubicadas en zonas rurales que no usaban un método anticonceptivo moderno, y a las mujeres indígenas, para quienes la Razón de Mortalidad Materna es cinco veces mayor que el total nacional²⁹.

En relación con las cifras de embarazo adolescente y con base en los datos del DANE, reportados por Profamilia, en el año 2021 se evidenció un aumento en la Tasa Específica de Fecundidad (TEFE) en niñas entre los 10 y los 14 de 0,2 puntos (pasó de 2,2 en 2010 a 2,4 en 2021).³⁰

Por último, el reporte de Emergencias Humanitarias en Colombia 2022, alertó sobre la situación que se vive en zonas como Putumayo, la costa Pacífica de Nariño y las zonas fronterizas de Ecuador y Norte de Santander, con respecto a prácticas de violencia basada en género que son ejercidas por grupos armados que tienen el control territorial; la comisión de delitos sexuales; la trata de personas; el sexo por supervivencia; y un incremento de contagias de Infecciones de Transmisión Sexual y/o VIH que se complica debido a una deficiencia en las rutas de atención en estas zonas del país³¹.

Las brechas en el acceso a estos servicios son evidentes y afectan de manera específica a las poblaciones más pobres, que viven en zonas rurales dispersas, a las víctimas de violencia, desplazamiento, personas en condición de discapacidad y a quienes han tenido que migrar de manera forzosa desde sus lugares de origen



²⁵ Ministerio de Salud. Marco Político de la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos. En: Marco político de la salud y derechos sexuales y reproductivos (minsalud.gov.co)

²⁶ Profamilia. 6 ideas para que el nuevo gobierno garantice los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en Colombia. En: DOCUMENTO_CANDIDATOS PRESIDENCIALES_PAGINAS-1.pdf (profamilia.org.co). Pág. 4.

²⁷ GIFMM Colombia. Evaluación conjunta de necesidades. Junio 2021. Ronda 5. En: 0821_ESPA%C3%91OL_5RONDA_Informe_JNA__022.pdf. Pág. 19.

²⁸ Profamilia. 6 ideas para que el nuevo gobierno garantice los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en Colombia. En: DOCUMENTO_CANDIDATOS PRESIDENCIALES_PAGINAS-1.pdf (profamilia.org.co). Pág. 6.

²⁹ Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto Nacional de Salud. (2018). Informe de evento. Mortalidad materna Colombia año 2017. <https://www.ins.gov.co/buscador-e33>

³⁰ Profamilia. 6 ideas para que el nuevo gobierno garantice los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas en Colombia. En: DOCUMENTO_CANDIDATOS PRESIDENCIALES_PAGINAS-1.pdf (profamilia.org.co).

³¹ [1] Humanitarian Response. Emergencias Humanitarias en Colombia. Enero a mayo de 2022.

Durante el año 2022 y en el marco de la implementación de los diferentes proyectos, realizamos análisis situacionales de género en 4 departamentos del país: Putumayo, Atlántico, Guajira y Nariño. Como resultado de este ejercicio, fue posible concluir que existen 4 grandes barreras que enfrentan las poblaciones para el acceso oportuno y de calidad a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva:

1. Condicionamientos culturales asociados a las prácticas ancestrales y otras dinámicas de las comunidades que afectan la autonomía de las personas para tomar decisiones sobre su sexualidad y su reproducción:

En el departamento del Putumayo, se obtuvo información de mujeres pertenecientes a comunidades indígenas, de las cuales cerca del 50% manifestaron hacer uso de métodos anticonceptivos modernos como el implante subdérmico y la inyección, mientras que el 50% restante expresó que este era un tema que debía abordarse en el hogar y ser concertado con sus parejas, padres, y en algunos casos, con las autoridades de la comunidad. Con respecto a la percepción que se tiene sobre si los y las adolescentes tienen plena autonomía para elegir cual método de planificación utilizar, el 49,5% refirieron que no la tienen y el 42,9% consideraron que si (5,61 % no sabe o no responde la pregunta). Al indagar sobre las razones de esta posible falta de autonomía, las personas manifestaron que existen temas que siguen siendo tabú o sobre los cuales hay un estigma en las comunidades, por lo que prefieren no hablar al respecto.

2. Situación migratoria de la población migrante y refugiada:

En el Departamento de la Guajira, fue posible constatar que la situación migratoria es una de las grandes barreras que las personas enfrentan para acceder a servicios de salud en general y de Salud Sexual y Reproductiva en particular. Las personas en condición de irregularidad están fuera del sistema de salud y la

única alternativa es acceder a través de los servicios de urgencias médicas que están disponibles para tipos de afectaciones a la salud muy específicas, dejando por fuera muchos servicios esenciales asociados a la sexualidad y la reproducción.

3. Desconocimiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, las rutas de atención y los mecanismos para acceder a servicios de Salud Sexual y Reproductiva por parte de las personas, las comunidades y los propios prestadores de servicios de salud:

Este aspecto fue señalado por los grupos de los 4 departamentos estudiados y especialmente por las personas en Nariño.

4. Largas distancias y costos de transporte para llegar a los centros de salud más cercanos:

En el caso de Barranquilla (Atlántico), al indagar sobre la accesibilidad a otros servicios de salud, el 89% de las personas encuestadas, refirieron que cuentan con un centro de salud cerca a su lugar de vivienda; sin embargo, un 9,3%, no tiene un centro de salud cercano. Cabe destacar que el 61% de las mujeres consideraron que les es fácil recibir orientación y atención de Salud Sexual y Reproductiva, frente al 30% que consideraron que no (el resto no sabe o no responde). Por otro lado, en la Guajira, las largas distancias y los costos de transporte para llegar hasta el centro de salud más cercano, son una barrera importante identificada de manera generalizada por las personas participantes del análisis.

“

Tengo el tiempo en contra para llegar a Panamá, solo tengo 4 meses antes que mi bebe nazca”

**Yorgelis Seijas,
mujer migrante embarazada**



“Yo amo a mi bebé, pero si hubiera sabido que los consejos de mis amigas para no quedar embarazada no funcionaban, me hubiera cuidado de otra forma, porque ahora nadie me da trabajo por estar embarazada. No sé cuántos exámenes médicos ya me tendría que haber hecho, lo que sí sé, es que en mi quinto mes voy a tener mi primera ecografía y hasta ahora empecé tomar unas vitaminas para que mi bebé esté bien, gracias a una brigada de salud en la que participé.

Estamos hace un mes varados en la playa de Necoclí (Darién, Colombia), tenemos que pedir comida a la gente, a veces nos ayudan, a veces no, pero eso no nos desanima porque creemos en un futuro mejor. Dormir en la playa es incómodo, pasamos hambre y calor, hay mosquitos y a mí me duelen mucho las caderas, se me hinchan los pies y a veces paso hasta 20 horas sin comer, las náuseas son muy fuertes y yo sé que eso le hace daño al bebé.

Tengo el tiempo en contra para llegar a Panamá, solo tengo 4 meses antes que mi bebe nazca, pero entre más grande tenga mi barriga más difícil será caminar. Sé que esto es temporal, que todo mejorará, el viaje estando embarazada ha sido más difícil, pero mi meta es encontrarme con otra parte de mi familia que está allá”.

5.

VIOLENCIA DE GÉNERO



El difícil acceso a justicia y protección para las mujeres en Guatemala y Honduras



95% de impunidad para los femicidios en Honduras

En **Honduras**, durante 2022, se registraron 297 asesinatos machistas, según cifras del Centro de Derechos de Mujeres, una cada 29 horas en un país de 10 millones de personas, 4,6 casos por cada 100.000 mujeres, y esto convierte a Honduras en el país con la mayor tasa de femicidios de la región³³. La tasa de impunidad es de un 95% y la falta de investigaciones adecuadas llama la atención: en un 44% de los casos no hay datos sobre la relación con el agresor, y en un 30% no hay información sobre la edad de la víctima.

Según el Panorama de Necesidades Humanitarias, los niveles alarmantes de violencia sexual se relacionarían también con el alto índice de embarazos y maternidades en la adolescencia. El 23% de las adolescentes de entre 15 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez en su vida y un alto número de estos son consecuencia de

violencia sexual.

En **Guatemala**, los femicidios han aumentado en los últimos años, reflejando una situación de violencia extrema contra las mujeres. Según el Ministerio Público y su Observatorio de las Mujeres, en el año 2022 se registraron 541 mujeres víctimas de muertes violentas, un promedio de dos al día. Guatemala ocupó el noveno puesto en la tasa de femicidios en América Latina.

Solo 1 de cada 3 mujeres en edad laboral activa trabaja o busca trabajo en Guatemala, mientras que las restantes tienden a trabajar únicamente en lo doméstico y en los cuidados de la familia. En las áreas más pobres del país, solo 1 de cada 10 mujeres trabajan fuera de casa. Esta subutilización de la mano de obra femenina representa un costo enorme para la tasa de crecimiento

del país y para sus resultados socioeconómicos y de inclusión. Una reciente investigación del Banco Mundial³⁴ concluye que la participación de las mujeres en el mercado laboral es mayor cuando son menores las tasas de violencia intrafamiliar.

Para las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes, el acceso a la protección y la justicia es aún más difícil debido a la falta de voluntad política y a las brechas de capacidad dentro de los sistemas de justicia penal de la región. Las mujeres son el principal sostén económico de los hogares monoparentales, sin embargo, la violencia de género y la impunidad obligan a muchas a huir de sus hogares a otras ciudades y pueblos o a dejar sus países en un intento de llegar a otros, incluido Estados Unidos.

³³ <https://oig.cepal.org/es/indicadores/femicidio>

³⁴ <https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/los-principales-impulsores-para-que-mas-mujeres-trabajen-fuera-de-casa-en-guatemala>

A finales del año 2022, se realizó un diagnóstico rápido de género en:

4 comunidades de los municipios de Chiquimula y Jocotán, en el que participaron 54 mujeres y 24 hombres de comunidades indígenas. En este diagnóstico se ha podido comprobar:

La distribución del trabajo en las familias de las comunidades visitadas es desigual porque las mujeres asumen completamente el trabajo doméstico y de los cuidados. La única labor doméstica que los hombres ocupan es ir buscar leña para la elaboración de los alimentos, mientras que actividades como buscar agua es una tarea exclusiva de las mujeres y las adolescentes del hogar, aunque las distancias sean largas y/o corran algún peligro en el camino.

“Nosotras las mujeres tenemos la obligación de cuidar a nuestros hijos e hijas y servir a nuestros esposos porque ellos trabajan”.

Esta concepción del rol de las mujeres responde al sistema patriarcal intergeneracional que se vive en comunidades rurales centroamericanas, donde las mujeres suelen ser vistas como servidoras y cuidadoras de la familia.

La discriminación de las mujeres por el hecho de ser mujeres se refleja en la casi nula participación en espacios públicos como el COCODE y otros ámbitos de participación comunitaria. Tanto mujeres como hombres perciben que ellas, junto con las adolescentes y niñas son más vulnerables a sufrir algún tipo de violencia, ya sea física, sexual o psicológica. Sobre las denuncias en casos de violación,

violencia y de abuso sexual, las personas temen a denunciar hechos de violencia que se viven en los hogares o a nivel comunitario. El principal freno se debe a la experiencia previa de quienes han denunciado para constatar más tarde que el agresor regresa a la comunidad para de este modo ejercer aún más violencia hacia sus víctimas.

Por otro lado, y de manera general, las personas de las comunidades no reconocen los tipos de violencia que existen, desconocen los mecanismos de denuncia y menos aún las opciones de protección.



Ahora puedo sonreír con libertad

Yahaira Pamela Ochoa Gómez

“Durante muchos años recibí insultos y golpes por mi expareja; me maltrataba diciéndome no servís para nada, no sos nadie. Atravesé por momentos muy difíciles, hasta pensé que era normal vivir así. Ahora entiendo que eso no es nada normal, es una experiencia que no le deseo a nadie”, expresa Yahaira Ochoa al recordar los incidentes violentos que vivió, en frente de sus hijos de 3 y 7 años y su hija de 11 años.

“Mis hijos presenciaban todos estos maltratos, mi expareja sentaba a mis tres hijos y frente a ellos me decía que no servía para nada, que era una inútil, siempre se refería a mí con palabras soeces”.

Vivían en una colonia del municipio de La Lima (Cortés), cuando pasaron las inundaciones causadas por los huracanes Eta & Iota en 2020. Yahaira encontró apoyo en sus hermanos que viven en San Pedro Sula. Con ellos se sintió menos angustiada y según recuerda *“siempre me decía a mí misma que de todo se sale, pero de donde no voy a salir si me quedo en mi casa, es de una tumba”.*

Participó en grupos de autoapoyo en su comunidad, *“Me ayudaron bastante, vinieron a cambiar mi mentalidad, comprendí que no era normal por lo que estaba pasando, que tenía derecho a ser*

feliz y no pasar amargada, puedo decir que ahora puedo sonreír con libertad, ahora siento que esto es vida, no la que yo tenía”.

Actualmente Yahaira no tiene trabajo remunerado, se está haciendo cargo del cuidado de un familiar enfermo. *“Me considero que soy capaz de luchar y trabajar en lo que se venga, la mentalidad de muchas mujeres es que no podemos. Debemos quitarnos eso, enfrentar la vida como se venga, la vida no nos va a presentar cosas fáciles, tenemos que sacar adelante nuestras familias siempre de manera honrada”.*

Erradicar la violencia de género es impostergable para los actores sociales

El Perú es un país donde el 47% de los peruanos cree que una mujer es culpable si se pone una minifalda y un hombre la acosa, y el 24% opina que un varón tiene el derecho a usar la fuerza para “corregir” a su pareja si ella “coquetea” con otros hombres, según Ipsos (2019).

Este año el país ha vivido casos de extrema violencia, como el de la joven limeña quemada en la vía pública por su expareja, o la enfermera fallecida por las profundas heridas ocasionadas al resistirse a una violación grupal en Juliaca.

Desde la infancia, las niñas son las víctimas principales de la trata con fines de explotación sexual (representan el 80% de los casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer) y sufren la violencia sexual de una forma incremental (en 2021 los CEM atendieron 7.738 casos contra niñas, 30% más que 2019), además de sufrir el incremento del embarazo y maternidad adolescente, ya alertado por UNFPA en 2022; **cada día ocurren 4 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, los cuales presentan una tendencia creciente**, a pesar de que según la legislación peruana estos embarazos serían resultado de violación sexual.

Cuando las mujeres se atreven a denunciar, encuentran un sistema judicial con carencias. Según la Defensoría del Pueblo (2018), tres de cada cuatro jueces y juezas especializados en materia penal no conocían las normas y la jurisprudencia internacional sobre procesos judiciales con una posible vulneración de los derechos de la mujer.



Cuando las mujeres se atreven a denunciar, encuentran un sistema judicial con carencias.



Según el estudio multisectorial de Acción contra el Hambre (2022) con población refugiada y migrante que vive en Lima metropolitana:

- El 27,2% de las mujeres afirma haber sufrido algún tipo de violencia durante la pandemia; el mismo porcentaje indica que sufrió violencia psicológica y/o verbal y el 6% respondió que su pareja ejerció alguna conducta de violencia física contra ella. Del total de mujeres venezolanas que sufrieron algún tipo de violencia, el 81% no buscó ayuda institucional y de éstas, el 75% no consideró necesario pedirla.
- Los principales motivos para no buscar ayuda son la desconfianza institucional, la falta de información, el temor por su situación migratoria irregular y a las represalias, o la dependencia económica y emocional con su agresor. Una mujer nos cuenta: “cuando una mujer venezolana va a denunciar, los policías quieren enamorarlas, no las toman en serio”.



En cuanto a la situación de las mujeres peruanas en áreas rurales, según datos recopilados en Ayacucho, proyecto “Alimentación, Salud y Equidad de Género en familias vulnerables altoandinas en el distrito de Santillana”:

- En el 24% de hogares las esposas han sido maltratadas por sus esposos de alguna forma durante los últimos 12 meses, cifra que sube ligeramente en los hogares con madres mayores de 30 años (28,1%). Las formas de violencia más recurrentes son la violencia verbal (20,4%), física (5,3%) y sexual (1,8%).
- Frente a esta situación, nuevos liderazgos surgen desde las organizaciones sociales de base y redes como la Red Interinstitucional de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y Sexual que han realizado acciones de incidencia ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y el gobierno regional de Ayacucho, y han promovido iniciativas para “garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante el estado de emergencia por la Covid-19”.



La imagen de la mujer venezolana se ha hipersexualizado”

Martha Fernández



Martha Fernández directora de la ONG Asociación Protección Población Vulnerables (APPV), conoce bien las historias de las mujeres violentadas.

Venezolana que llegó como refugiada al Perú con su esposo e hijos en 2007, durante años ha apoyado a sus compatriotas: “En la actualidad la imagen de la mujer venezolana se ha hipersexualizado”, destaca Fernández, quien empezó a recibir casos de

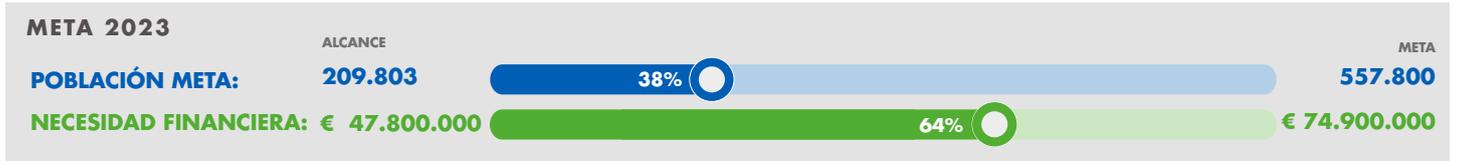
violencia y acoso durante su paso por la ONG Unión Venezolana. Al ver el gran crecimiento de estos casos, fundó la organización que hoy lidera para proteger y empoderar a personas vulnerables, entre ellas a las mujeres migrantes.

Señala como causas de la violencia hacia las venezolanas la falta de empatía de peruanas que las ven como “robamaridos”, y la desprotección por

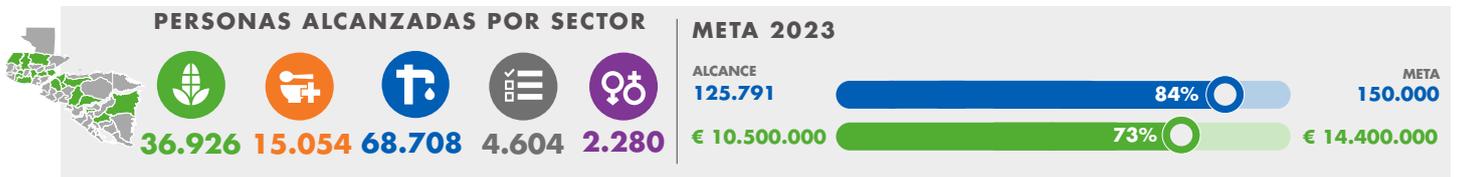
parte de las autoridades para recibir sus denuncias. Fernández ha acompañado casos en que jóvenes víctimas de violencia han sido desatendidas solo por falta de documentos. Hoy recomienda que las denunciantes acudan al CEM para que una funcionaria las acompañe a la comisaría, acreditando su acusación.



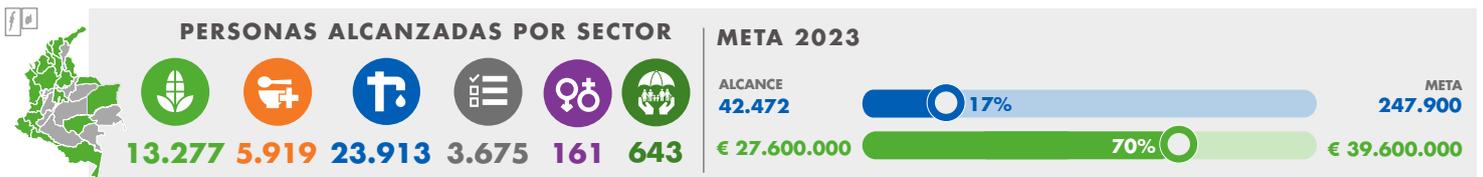
ALCANCE REGIONAL ENERO - MAYO 2023



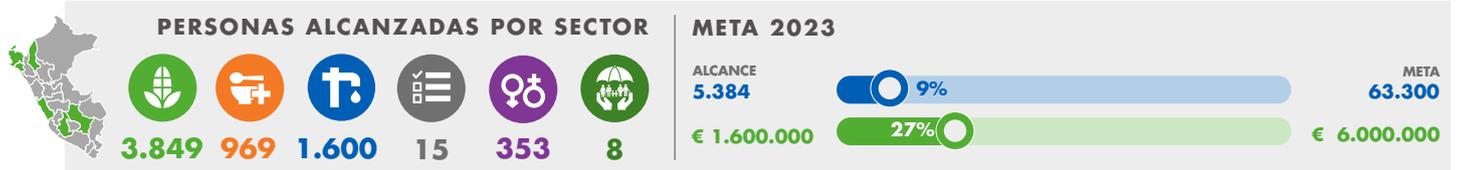
CENTROAMÉRICA



COLOMBIA



PERÚ



OTROS PAÍSES





CON HAMBRE
DE CAMBIARLO
TODO.

ALIADOS ESTRATÉGICOS



Unión Europea
Protección Civil y
Ayuda Humanitaria



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA



Suecia
Sverige



In partnership with
Canada



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE



**Cooperación
Española**



**UNHCR
ACNUR**
La Agencia de la ONU
para los Refugiados



unicef
para cada infancia



OIM
ONU MIGRACIÓN



BID
Banco Interamericano
de Desarrollo



FCAS Fondo de Cooperación
para Agua y Saneamiento



**Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua**



**GENERALITAT
VALENCIANA**



Junta de Andalucía
Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo



Fundación "la Caixa"
Work4Progress



**Pathy Family
Foundation**

LA IGLESIA DE
JESUCRISTO
DE LOS SANTOS
DE LOS ÚLTIMOS DÍAS

ferrovial

Scotiabank

worldcoo



DESCUBRE MÁS:
accioncontraelhambrelatinoamerica.org



**ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE**